

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Oficina de Gestión Asociada N°1

ACTUACIONES N°: 1407/23



H105014994230

JUICIO: "NIEVA ORELLANA PABLO ANDRES C/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN S/ AMPARO " - M.E. N° 1407/23

San Miguel de Tucumán, abril del 2024.

REFERENCIA: para dictar sentencia en la acción de amparo caratulada: "Nieva Orellana Pablo Andrés c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ amparo", que se tramitó por ante este Juzgado del Trabajo de la IV° Nominación.

ANTECEDENTES DEL CASO

DEMANDA: En fecha 27/06/2023 el letrado David Emanuel Gómez, en su carácter de apoderado (conforme surge del poder *ad litem* de fecha 16/06/2023 acompañado al momento de interponer demanda) del Sr. Pablo Andrés Nieva Orellana DNI 34.764.232 con domicilio real en Santa Fe n° 2532 interpuso acción de amparo en contra de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (Popul ART), CUIT 30-51799955-1, con domicilio en calle San Martín n° 469, tendiente al cobro de la suma de \$4.174.625,12 con más intereses compensatorios, moratorios, gastos y costas, hasta la efectiva fecha de pago total cancelatorio todo ello en concepto de las prestaciones dinerarias dispuestas por las leyes 24.557, 26.773 y 27.348 que son adeudadas a raíz de la incapacidad permanente, parcial y definitiva adquirida por la actora como consecuencia del accidente de trabajo *in itinere* sufrido el 11/02/2022.

Solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 24.557, del art. 43 de la Resolución SRT N° 298/17, del DNU N° 669/19, del artículo 2 de la Resolución SRT N° 414/99, y/o de cualquier otra normativa que impida el íntegro progreso de la presente acción.

Hizo referencia a la legitimación activa y pasiva en la presente causa alegando que su mandante es damnificado directo en su persona pues el accidente ocurrió mientras el actor se trasladaba de su domicilio a su lugar de trabajo, que su mandante efectivamente estuvo y está vinculado por una relación pública de trabajo con el Ente Cultural de Tucumán razón por la cual acciona contra la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

Relató que en fecha 01/02/2010 su mandante ingresó a trabajar como contratado en el Ente Cultural de Tucumán el que depende del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, que el 27/11/2021, paso a formar parte de la planta permanente, en tareas administrativas de lunes a viernes de 9 a 18 horas en el Departamento Patrimonial, contando con la cobertura por riesgos de trabajo de la aseguradora demandada y que, durante los siguientes meses posteriores a su nuevo cargo, todo transcurría con una excelente expectativa por parte del actor.

Señaló que el día 11/02/2022, en horas 7:30 aproximadamente, mientras se dirigía en motocicleta desde su domicilio ubicado en calle San Martín n° 251 fue embestido por un automóvil en la intersección de Castelli y Santiago del Estero, lo que provocó que su mandante pierda el dominio de su conducido y caiga al piso. Acto seguido no pudo incorporarse puesto que presentaba a simple vista fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo. Ante ello, fue asistido por el servicio de emergencias 107 con posterior trasladado al Hospital Centro de Salud, donde le realizaron una primera toilette de la herida y estuvo unas horas en observación. Tomando conocimiento del siniestro, la Lic. Lidia J. Onofrio del Depto. RR.HH. del Ente Cultural Tucumán, presentó en formulario escrito la denuncia del accidente in itinere ante POPULART, la que quedo registrada con el N° 35690/22.

Luego de que la demandada tomara intervención, al actor lo derivaron al Sanatorio del Norte S.R.L., donde le realizan una nueva toilette quirúrgica con tracción esquelética; el 18/02/2022 le realizaron osteosíntesis del pilón tibial, de la tibia en su tercio medio y del peroné en su tercio distal; el 25/02/2022 le autorizan un injerto de piel en la zona, y el 16/03/2022, ante la presencia de un intolerable deseje, le retiran material de osteosíntesis del pilón tibial y le colocan otro.

Añadió que el Sr. Nieva continuó con controles por consultorio externo, pero el 03/06/2022 le realizan cirugía plástica de herida por colgajo vascularizado sural de tibia izquierda; que recibido el alta sanatorial, siguió con sesiones de fisiokinesioterapia hasta recibir el alta definitiva en fecha 26/01/23 con secuelas incapacitantes con vuelta a su lugar habitual de trabajo.

Manifestó el 10/02/2023, POPULART inició en la Comisión Médica N° 1 el expediente N° 063832/23, Motivo: Determinación de la Incapacidad y que en fecha 30/05/2023, se dictaminó que el actor presentaba una Incapacidad Permanente Parcial y Definitiva del 23,60%.

Precisó que, luego de haber transcurrido el plazo de cinco días hábiles para apelar el dictamen, el 10/06/2023 fueron notificadas ambas partes que el expediente quedó en la condición de firme (cosa juzgada administrativa); que, al tener conocimiento que otros trabajadores no estaban recibiendo el pago de sus

indemnizaciones en tiempo por la misma ART, remitió telegrama laboral del 16/06/2023 y que a tal intimación nunca recibió la contestación ni el pago por medio de transferencia.

En consecuencia, sostuvo que es clara y manifiesta la conducta arbitraria, maliciosa y por consiguiente dolosa que omite pagar al trabajador una obligación de carácter alimentaria, lo que justifica plenamente la vía de amparo deducida.

Hizo referencia a la procedencia de la vía de amparo; planteó la inconstitucionalidad del artículo 43 de la Resolución de SRT N° 298/17 por las sumas que lo integran por cuanto pretende limitar los alcances del art. 1 del Convenio N° 95 de la OIT, al excluir elementos que no integrarían el cálculo del ingreso base del art. 12 de la Ley 27.348, por lo que resulta regresiva respecto a derechos en materia de seguridad social para los trabajadores, de acuerdo con los estándares constitucionales y convencionales aplicables.

A lo expuesto, añadió que la Resolución de SRT N° 298/17, fue emitida por órgano incompetente para legislar en tal materia, desnaturalizando los fines que la propia ley persigue. Es decir, por vía de resolución administrativa, se pretende modificar un concepto brindado por una Ley emitida por vía legislativa, sin respetar la jerarquía normativa establecida por nuestra Constitución.

Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del DNU N° 669/19 por la forma de actualización del ingreso base mensual (en adelante, IBM) desde la primera manifestación invalidaste (en adelante, PMI). Alegó que el segundo párrafo del artículo 1 del mencionado DNU sustituye la forma de actualización del IBM desde la PMI hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización, que consistía originariamente en “ (...) un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del banco de la nación argentina”, por el de “...un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores (RIPT) en el período considerado”.

Señaló que el decreto es inconstitucional por la vía utilizada por cuanto no pudo modificarse el régimen de riesgos del trabajo por medio de un decreto de necesidad y urgencia y que el decreto importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de las atribuciones del Poder Legislativo. En cuanto al fondo señaló que la modificación efectuada implica una clara violación al principio de progresividad y no regresividad por cuanto la Ley 27.348 es más protectora y favorable.

Manifestó que para la determinación del IBM se estará al artículo 12 de la Ley 24.557, sin tener presente la sustitución inconstitucional dispuesta por el Decreto N° 669/19, a la Convención de la OIT n° 95 y a la

interpretación jurisprudencial y doctrinaria al respecto.

Solicitó la aplicación del art. 770 del C.C.C.N. alegando la mora por incumplimiento de pago.

Hizo referencia a la procedencia de los intereses compensatorios y moratorios y planteó la inconstitucionalidad del art. 2 de la Resolución N°414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (en adelante, SRT) alegando que la interpretación literal de la misma afecta el derecho de propiedad del trabajador ya que licua la deuda por el transcurso del tiempo en que el damnificado es privado del capital, el cual nació a partir del daño ocasionado. Añadió que tal norma difiere el inicio del cómputo de los intereses adeudados por el pago de prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo a favor del trabajador y solicitó que se fije la fecha del accidente laboral como el momento a partir del cual deberán devengarse los intereses, según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, según lo dispone el art. 1° de la Resolución SRT N° 414/99 en lo que no fue desechado por inconstitucional.

Solicitó la aplicación de intereses compensatorios desde la fecha de la primera manifestación invalidante acaecida el día 11/02/2022 hasta la fecha límite de la puesta a disposición no abonada, es decir, el día 15/06/2023, y los intereses moratorios adeudados desde el día 15/06/2023 hasta su efectivo pago total y cancelatorio.

Planteó la inaplicabilidad de la Ley 24.432 alegando que fija un tope máximo a la responsabilidad por las costas judiciales de forma irrazonable y arbitraria. Subsidiariamente solicitó que se declare su inconstitucionalidad por cuanto viola el régimen federal y el principio de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional al limitar la responsabilidad de los condenados al pago de las costas.

Por último, practicó planilla, ofreció prueba documental y efectuó reserva de caso federal.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA: Corrido el traslado de ley, en fecha 07/07/2023 contestó demanda el letrado Rafael Rillo Cabanne en su carácter de apoderado de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (conforme poder de fecha 13/10/2021 que fue acompañado como documental al momento de contestar demanda) solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.

Planteó la incompetencia del juzgado para entender en la presente causa.

Procedió a efectuar una negativa general y particular de los hechos alegados por el actor. Negó la autenticidad de la documentación que procedo a detallar a continuación: 1) Poder ad litem. 2) DNI y CUIT del actor 3)

Situación de revista 4) Recibos de sueldo 5) Copias digitales expte SRT N° 063832/23 y 6) 1 Original Telegrama Ley n° 23.789 CD936889367.

Alegó que el actor no adjuntó ningún instrumento que permita acreditar su condición de empleado del Ente Cultural de Tucumán, por lo que no se encuentra probada la vinculación entre el Sr. Nieva y el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán. A lo expuesto, añadió que la CPA no ha consentido el siniestro.

Sostuvo que la causa objeto del proceso se encuentra regida por el derecho administrativo y público, no se trata de un hecho aislado producto del trabajo de un asegurado y que no se determina ni siquiera si el actor es o no empleado de la provincia.

Hizo referencia a la improcedencia de la vía del amparo.

Se opuso a los planteos de inconstitucionalidad deducidos por el letrado apoderado del actor. Planteo la inconstitucionalidad de la tasa activa.

Por último, ofreció pruebas y efectuó reserva de caso federal.

RECHAZO DE INCOMPETENCIA: Mediante sentencia de fecha 30/08/2023 se rechazó el planteo de incompetencia deducido por el letrado apoderado de la parte demandada y se declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT.

RECHAZO DEL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Por sentencia de fecha 20/10/2023 deducido en contra del art. 28 del Código Procesal Constitucional e impuso las costas a la demandada vencida.

RECHAZO DEL PEDIDO DE ORDINARIZACIÓN DEL PROCESO: Mediante Sentencia de fecha 28/12/2023 se rechazó el pedido de ordinarización del proceso y se determinó la procedencia de la vía de amparo.

APERTURA A PRUEBAS: En fecha 06/02/2024 se procedió a proveer las pruebas ofrecidas, se rechazó la oposición deducida por la parte demandada y se dispuso que los oficios ordenados deberán contestarse en el término de tres días.

RENUNCIA AL PODER Y NUEVO APERSONAMIENTO POR DEMANDADA: Por presentación de fecha 06/02/2024 el letrado Rafael Rillo Cabanne renunció al poder oportunamente otorgado por la Caja Popular de Ahorros.

En fecha 20/02/2024 se apersonó como apoderada de la Caja Popular de Ahorros la letrada María Eugenia Cirilo, conforme surge del poder general para juicios de fecha 16/10/2023 acompañado.

RECHAZO OPOSICIÓN: Mediante Sentencia de fecha 23/02/2024 se rechazó la oposición interpuesta por la parte demandada.

INFORME ACTUARIAL: El 30/08/2023 Secretaria Actuarial informó sobre las pruebas ofrecidas y producidas por el actor y la demandada.

DICTAMEN DEL AGENTE FISCAL: el 16/04/24 emitió dictamen la Sra. Agente Fiscal de la Ilda. Nominación.

EXPEDIENTE PARA SENTENCIA: Por providencia del 17/04/24, se ordenó pasar la presente causa a despacho para resolver la acción de amparo interpuesta por el actor.

ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

I.- Conforme los términos de la demanda y su responde, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales corresponde emitir pronunciamiento son:

- 1) Analizar si resulta procedente la vía de amparo;
- 2) Dilucidar al respecto de si el actor prestó servicios para el Estado, si tuvo un accidente laboral *in itinere* y si, como consecuencia de dicho siniestro, quedó con algún porcentaje de incapacidad;
- 3) Determinar si resultan procedentes las indemnizaciones laborales reclamadas con fundamento en las prestaciones sistémicas de la LRT (indemnización del art. 14 apartado 2, inciso "a" de la Ley 24.557 y sus actualizaciones).
- 4) Inconstitucionalidad del art. 43 de la Resolución de la SRT n° 298/17, del DNU 669/19 y del art. 2 de la Resolución N° 414/99;
- 5) Los intereses como el planteo de inconstitucionalidad de la tasa activa, las costas y los honorarios.

II.- Respecto de la documentación agregada por la parte actora, Popular ART SA desconoce la siguiente documentación: 1) Poder *ad litem*. 2) DNI y CUIT del actor 3) Situación de revista 4) Recibos de sueldo 5) Copias digitales expte SRT N° 063832/23 y 6) 1 Original Telegrama Ley n° 23.789 CD936889367.

Al respecto, estimo que la impugnación deducida por la parte demandada no puede prosperar por cuanto no logró desvirtuar la autenticidad del poder *ad litem* acompañado (el cual posee carácter de instrumento público debido a la certificación de la firma por el funcionario judicial) como tampoco del DNI y CUIT del actor.

Por otra parte, en lo concerniente a los recibos de haberes, las copias digitales del expediente administrativo que tramitó ante la SRT y el TCL n° CD936889367, estimo que la impugnación no puede prosperar al encontrarse acreditada su autenticidad con las contestaciones de oficio del Ente Cultural de Tucumán (informes de fecha 28/02/2024, 04/03/2024 y 06/03/2024), de

SRT (informe de fecha 20/02/2024) y del Correo Oficial de la República Argentina (informe de fecha 23/02/2024).

En consecuencia, corresponde tener por auténtica la prueba documental acompañada por el Sr. Nieva al momento de interponer demanda. Así lo declaro.

III.- A fin de resolver los puntos materia de debate, y teniendo en cuenta el principio de pertinencia según el cual el juez puede limitar su análisis solamente a aquella prueba que considere conducente; atento los principios de la sana crítica racional, y de lo prescripto por los arts. 126, 127, 128, 136, 214, 322 y ccdtes. del CPCyCC, se analizarán los hechos que fundan la demanda, para así determinar la procedencia o no de las cuestiones litigiosas.

PRIMERA CUESTIÓN:

1. Las partes controvierten al respecto de la procedencia de la vía de amparo.

La actora afirma que resulta procedente la vía del amparo por tratarse del reconocimiento de derechos de raigambre constitucional y convencional, que enumera y menciona en la demanda. Sostuvo que no estamos en presencia de hechos de difícil esclarecimiento, que ni tampoco la cuestión jurídica - que es la central y dominante, a la que prácticamente se reduce todo el litigio en examen- se presenta de dificultosa intelección, pues representa un tópico esencialmente de derecho la aplicabilidad de la ley o la dilucidación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a la luz de las circunstancias del caso concreto.

La demandada, por su parte, sostuvo que la vía de amparo no resulta procedente.

2. Ahora bien, el art. 43 de la Constitución Nacional (en adelante, CN) dispone que *“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”*.

La CN exige que no exista otro medio judicial más idóneo para el reconocimiento de los derechos. En la presente causa, la acción de amparo incoada por la Sra. Gómez no tiene en los digestos procesales locales, un medio judicial más idóneo que proteja de mejor o igual modo los derechos que pretende que se le reconozca, por lo que la naturaleza alimentaria y urgente de la medida amerita su tratamiento mediante esta excepcional vía, ya que la acción tiene por

objeto obtener el pago de las indemnizaciones por incapacidad laboral.

Además, la norma constitucional antes citada, exige que nos encontremos frente a un acto de autoridades públicas o de particulares que lesionen en forma actual o inminente, derechos y garantías reconocidos por la CN y que, además, que el vicio sea manifiestamente ilegal o arbitrario.

3. El actor, en la presente acción de amparo, reclama el pago de la indemnización por incapacidad laboral, para lo cual solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversas normas de la LRT, siendo apta, la vía del amparo para la resolución de tales cuestiones.

De igual modo, entiendo que se encuentran en juego cuestiones de puro derecho, relativas a la obligación de pago de las indemnizaciones por incapacidad laboral previstas en la LRT y en la Ley 26.773 y la interpretación del modo de cálculo de tales indemnizaciones.

Sobre este tópico, no resultan necesarios mayores elementos de hecho, debate y prueba propios del procedimiento ordinario, así como tampoco estamos en presencia de una *litis* que implique una complejidad tal, que no pueda ser resuelta con los elementos aportados en el proceso, toda vez que el dictamen de Comisión Médica por el cual se le reconoció la incapacidad laboral al acto estaría firme, por lo que se encuentran cumplidos la totalidad de los requisitos constitucionales necesarios para la recepción de la vía expedita y excepcional del amparo.

4. Por consiguiente, la vía del amparo resulta idónea para entender en la presente cuestión. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTIÓN

1. Las partes controvierten al respecto de si el Sr. Nieva Orellana prestaba servicios y está vinculado por una relación pública de trabajo con el Ente Cultural de Tucumán perteneciente al Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y si el 11/02/2022, sufrió un accidente de trabajo in itinere que le generó una incapacidad del 23,60 %.

2. A continuación, procedo a analizar los puntos señalados precedentemente.

2.1 Relación de trabajo:

El actor, con la demanda, presentó 21 recibos de sueldos de donde se desprende que presta servicios en el Ente Cultural de Tucumán, cuya autenticidad fuera acreditada con las contestaciones de oficio del Ente Cultural de Tucumán de fechas 28/02/2024, 04/03/2024 y 06/03/2024.

Además, de la contestación de oficio de la Comisión Médica n° 1 efectuada en fecha 20/02/2024 surge que el Ente Cultural de Tucumán efectuó la denuncia del siniestro Populart ART SA consignándose como empleadora

del Sr. Nieva Orellana Pablo Andrés.

Por lo expuesto, concluyo que el actor evidenció la prestación de servicios para el Ente Cultural de Tucumán, su relación de empleo (público) y, por ende, que correspondía la cobertura de los accidentes y enfermedades profesionales de la LRT a la demandada, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Así lo declaro.

2.2 Existencia del accidente laboral y los grados de incapacidad:

a.- De la prueba documental del actor se desprende que acompañó:

Dictamen de la Comisión Médica de fecha 30/05/2023 del que se desprende que el actor sufrió un accidente in itinere el día 11/02/2022, que trabajaba en el Ente Cultural de Tucumán, que recibió estudios y tratamientos médicos y que padece de una incapacidad permanente, parcial y definitiva (en adelante, ILPPD) del 23,60 % (presentación efectuada el día 27/06/2023).

b.- De la prueba informativa del actor se desprende que:

En fecha 20/02/2024 contestó oficio la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por medio del cual procedió a remitir copia del Expediente SRT N°063832/23 en donde se encuentra: la denuncia del accidente efectuada ante Populart y el Dictamen de la Comisión Médica n° 1 de fecha 30/05/2023 en el que se determinó que como consecuencia del accidente sufrido el día 11/02/2022 que le ocasionó la fractura de tibia y peroné izquierdo consolidado en desaje el actor padece una incapacidad permanente parcial y definitiva del 23,60%.

Del análisis de la prueba mencionada, en especial del Dictamen de la Comisión Médica y de la denuncia formulada por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, resulta que el Sr. Nieva sufrió un accidente in itinere y que, como consecuencia de dicho siniestro, padece una ILPPD del 23,60%.

3.- En base a lo expuesto, considero debidamente demostrado por el actor (en base a los recibos de sueldo corroborados por los informes del Ente Cultural de Tucumán y el Dictamen emitido por la CM corroborado por la SRT): la existencia de la relación laboral entre el Sr. Nieva Orellana y el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán; el contrato de afiliación que vinculó al Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán con La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (Popul ART), el carácter de asegurado que revistió el accionante; que este último sufrió un accidente de trabajo in itinere el 11/02/2022 y que, como consecuencia de ello, padece una ILPPD del 23,60%. Así lo declaro.

TERCERA CUESTIÓN

1. Las partes controvierten al respecto de la constitucionalidad del art. 43 de la Resolución de la SRT n° 298/17, del DNU 669/19,

y del Art. 2 de la Resolución 414/99.

Al respecto del art. 43 de la Resolución S.R.T. N° 298/17 señaló que es inconstitucional por cuanto pretende limitar los alcances del art. 1 del Convenio 195 de la OIT, al excluir elementos que no integrarían el cálculo del ingreso base del art. 12 de la Ley 27.348. A lo que añadió que la Resolución S.R.T. N° 298/17, fue emitida por órgano incompetente para legislar en tal materia.

Asimismo, planteo la inconstitucionalidad del DNU N° 669/19 por la forma de actualización del IBM desde la PMI. Alegó que el segundo párrafo del artículo 1 del DNU N° 669/19, sustituye la forma de actualización del ingreso base mensual desde la P.M.I. hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización, que consistía originariamente en "...un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del banco de la nación argentina", por el de "...un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores (RIPTE) en el período considerado". Agregó que el decreto es inconstitucional por la vía utilizada por cuanto no pudo modificarse el régimen de riesgos del trabajo por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

Por último, en lo que concierne al art. 2 de la Resolución n° 414/99 de la SRT señaló que es inconstitucional en cuanto difiere el inicio del cómputo de los intereses adeudados por el pago de prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo a favor del trabajador, y, en su mérito, fija la fecha del accidente laboral como el momento a partir del cual deberán devengarse los intereses, según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos.

2. A los efectos de expedirme al respecto tengo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el control de constitucionalidad es una de las más delicadas misiones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, de modo, pues, que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye un acto de suma gravedad institucional, habida cuenta de la presunción de legitimidad de que gozan las leyes debidamente sancionadas y promulgadas. Se trata en consecuencia, de la última ratio del orden jurídico. (CSJN Fallos: 322:919; 319:1524; 323:2409; 316:188).

Sobre esta cuestión la CSJT sostuvo: "La declaración de inconstitucionalidad habrá de recaer sobre una regla jurídica necesaria para dirimir la suerte de la litis, cuya definición debe depender directamente de la validez o invalidez de la norma cuestionada. En consecuencia, no basta citar las normas constitucionales que se afirman vulneradas, pues resulta menester demostrar la concreta trasgresión al derecho que se considera afectado, indicando las razones por las cuales existe la denunciada incompatibilidad entre la norma legal aplicada y la Constitución Nacional y Pactos Internacionales" (Crf. CSJT, sentencia N° 705 del

06/08/07).

3. Inconstitucionalidad del artículo 43 de la Resolución de SRT N° 298/17:

3.1 Del análisis de los recibos de sueldo del actor (corroborados por el informe remitido por el Ente Cultural de Tucumán del 28/02/2024, 04/03/2024 y 06/03/2024), surge que el Sr. Nieva percibía conceptos no remunerativos identificados como “Ley 7991”, montos a los cuales no se le efectúan los descuentos de ley destinados al sistema jubilatorio y de la seguridad social.

3.2 La Ley provincial N° 7007 -modificada por ley 7991- en el artículo 2, otorga a la totalidad de los empleados públicos dependientes de los tres poderes de la provincia de Tucumán (incluido el personal policial), una compensación de carácter de no remunerativo no sujeta a aportes ni contribuciones, la cual se abona en efectivo. Dicha compensación surge de “la diferencia entre el haber líquido del agente al momento de la sanción de la presente y el haber líquido resultante de la aplicación del artículo 1° de esta Ley”.

Además, la norma aclaró que se entiende por haber líquido “el que se obtiene de deducir al haber bruto los descuentos establecidos por Ley”.

3.2 Del texto de la norma bajo análisis y de los recibos de sueldo del actor, resulta que el Sr. Nieva percibía en efectivo tal compensación no remunerativa, de manera mensual, durante todo el tiempo trabajado, incluido el periodo anual anterior al accidente.

Ahora bien, de ello resulta innegable la naturaleza salarial de dicha compensación, por cuanto se abona mensualmente juntamente con los haberes que percibe de parte del Provincial como contraprestación por los servicios de policía de seguridad que el accionante desempeña y que se calcula en base a la diferencia entre el haber líquido del agente y el resultante de la aplicación de dicha ley.

3.3 Los trabajadores -públicos o privados- persiguen como objeto primordial, al prestar su fuerza de trabajo, la obtención de un salario que les permita cubrir sus necesidades vitales y las de su familia. Tal carácter alimentario justifica la íntegra y extensa protección brindada por las leyes y por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), al considerar al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional (fallos: Aquino, Vizotti, Álvarez, etc.).

Así, sea que se trate de una relación de empleo privado -regido por la LCT- o público -bajo las normas de empleo público provincial- la naturaleza alimentaria del salario (percibido por el trabajador o por el agente público) se mantiene intacta. Por ello, las presentes consideraciones respecto del concepto de remuneraciones y la aplicación del Convenio n° 95 de OIT, resultan válidamente

aplicables en ambos casos.

La remuneración del trabajador es uno de los pilares en que se funda el contrato de trabajo o la relación de empleo público y forma parte del núcleo de la contratación. Así, la vinculación laboral se tipifica a través de dos derechos y correlativos deberes: la prestación del servicio (bajo dependencia privada o pública) y el pago de la remuneración.

Al respecto, el artículo 1 del Convenio n° 95 de la OIT -de jerarquía supralegal- define al salario como “la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. Por su parte el artículo 103 de la LCT, dispone que se entiende por remuneración “la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo”.

De este modo, la remuneración constituye la ventaja patrimonial (ganancia) que se percibe como contraprestación del trabajo subordinado y que puede recibir diversas denominaciones, tales como salario, retribución, sueldo, etc.

En el presente caso, la “compensación de carácter de no remunerativo no sujeta a aportes ni contribuciones”, abonada por el estado provincial en efectivo al actor en virtud de las leyes 7007 y 7991, constituyen lisa y llanamente remuneraciones en los términos y alcances establecidos por el mencionado Convenio n° 95 de OIT y el artículo 103 de la LCT (por aplicación análoga), al tratarse de una contraprestación pagada en efectivo de manera mensual por el trabajo de policía desarrollado.

La CSJN, en los precedentes “Pérez Aníbal Raúl c/Disco S.A. s/ despido”, del 01/09/09, “González Martín Nicolás c/Polimat S.A. y otro”, del 19/05/10 y “Díaz Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.” del 04/06/13, se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los adicionales o acuerdos no remunerativos otorgados a los trabajadores, por considerarlos que forman parte del salario y que perjudican al trabajador.

El carácter no remunerativo otorgado a tales compensaciones violenta derechos laborales de orden público indisponible para las partes, contemplado en los arts. 14 bis y 75, incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional, el Convenio n° 95 de la OIT, así como el art 103 LCT en cuanto dispone que toda contraprestación por el trabajo tiene naturaleza salarial. El carácter no remunerativo asignado a dichos adicionales pretende -en realidad- cambiar la naturaleza jurídica de lo que es propio de la contraprestación, además de vulnerar el principio de progresividad art. 2.1 del Pacto Internacional de los

derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

En igual sentido -la jurisprudencia que comparto- ha dicho que: “Los rubros remuneratorios se distinguen por constituir una contraprestación por el trabajo dependiente, de tal forma que constituyan una ganancia que se incorpore a los patrimonios de los trabajadores. Aquí es donde cobra real importancia, el tener en claro la naturaleza remuneratoria de las prestaciones que reciben los trabajadores, de los que no las tienen. Es oportuno poner de resalto que esta distinción es muy importante, por sus consecuencias. Ello es así, por cuanto las prestaciones remunerativas tienen descuentos por aportes a la seguridad social y sindical (y originan contribuciones de los empleadores), además de estar gravadas por el impuesto a las ganancias. También se toma en cuenta para el cálculo del SAC, de las VAC y otras licencias, de las horas extras y de las indemnizaciones y sanciones. Por otra parte, tienen garantizado el SMUJM como mínimo no embargable, salvo en el caso de alimentos y litis-expensas. Sin perjuicio de los diversos criterios jurisprudenciales, respecto de que si son constitucionales o no, los acuerdos no remunerativos; entiende ésta Vocalía, con total convicción que más allá de la calificación que se les dé, prima la real naturaleza con la que se otorgan, que no es otra que la de “aumentos salariales” encubiertos, originados como consecuencia de la contraprestación por el trabajo cumplido por el dependiente, y al constituir una ganancia que se incorpora al patrimonio del trabajador, tiene indefectiblemente naturaleza remuneratoria. Razón por la que considero que corresponde hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad que los actores formulan, respecto de los acuerdos no remunerativos: Acuerdo/2008 y Acuerdo n° 570 (N/R) /2009 para los empleados de Comercio, al revestir los mismos, como se analizara precedentemente, naturaleza remuneratoria e integrativa del sueldo por lo que corresponde, sea proyectada a los efectos salariales e indemnizatorios, sobre los ítems contenidos en la demanda” (Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, autos “Contreras Federico Exequiel y otro vs. Carteluz S.R.L. s/cobro de pesos”, Sentencia N° 357, de fecha 07/11/2014).

3.4 Las afirmaciones precedentemente esbozadas me permiten válidamente sostener que las sumas compensatorias adicionales abonadas por el estado provincial (Ente Cultural Tucumán) al Sr. Nieva en virtud de las Leyes N° 7991 y 7007, revisten naturaleza salarial y se incorporan a las remuneraciones mensuales que percibe como empleado público y deben ser consideradas como base de cálculo de las indemnizaciones por incapacidad laboral previstas en el artículo 12 de la LRT.

La redacción original del artículo 12 de la LRT preveía que el IBM era el resultado de “dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización” correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un año, por el

número de días corridos comprendidos en el período considerado y luego multiplicar tal resultado por 30,4.

Con ello, resultaban excluidos los montos percibidos por el trabajador que no cotizaban como aportes en el sistema jubilatorio y de la seguridad social, aun cuando se liquidaran y abonaran juntamente con el salario. Ello implicó que la base de cálculo del IBM se equiparaba al “salario previsional”, apartándose del “salario real” del trabajador y tenía por resultado que el trabajador percibiera las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral (transitoria o definitiva), en sumas sensiblemente inferiores al sueldo real o de bolsillo, al no considerarse la totalidad de lo percibido, sino sólo aquellas sujetas a aportes y contribuciones.

La nueva redacción del artículo 12 de la LRT (incorporada por la reforma introducida por el artículo 11 de la Ley 27.348), establece una fórmula de cálculo del IBM del trabajador víctima de un accidente o enfermedad profesional muy diferente y amplificada, ya que considera el promedio mensual de “todos los salarios devengados” por el trabajador durante el año anterior a la PMI, de conformidad con lo establecido por el Convenio n° 95 de OIT.

En efecto, el artículo 12, inciso 1 de la LRT, dispone que: “A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.

Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y difundido por el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL”.

Tal reforma implica un avance en materia de reconocimiento y mejora de los derechos económicos sociales que les asiste a los trabajadores en relación de dependencia, víctimas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, al incorporar la totalidad de los salarios en la base de cálculo del IBM, fueran o no remunerativos. Así, deben considerarse (a la hora de efectuar el cálculo del promedio) la totalidad de salarios del trabajador, sin establecer distinciones sobre si se trata de conceptos remunerativos o no remunerativos, dado la naturaleza salarial de ambos, a la luz de lo prescripto por la norma de jerarquía suprallegal (artículo 1 del Convenio n° 95 de OIT).

3.5 Sin embargo, la SRT, en un claro exceso reglamentario, dictó el artículo 43 de la Resolución n° 389/17. Dicha norma (ubicada en el título II: DE LAS DISPOSICIONES DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO III DE LA LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO), definió el

alcance del IBM y estableció que: “No integrarán el cálculo del Valor del Ingreso Base, conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 24.557, sustituido por el artículo 11 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, aquellas sumas que correspondan a los conceptos establecidos en el artículo 7° de la Ley N.º 24.241 y los artículos 103 bis y 106 de la Ley N° 20.744, y todo otro concepto que no integre el salario aun cuando se liquide conjuntamente con él”.

En forma similar, los artículos 11 y 24 (sobre la liquidación de la prestación dineraria, sobre la determinación de las prestaciones dinerarias y/o indemnizaciones por parte de las CM y sobre el procedimiento de homologación de acuerdos), establecen -en similares términos- que: “Considerando los salarios declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.), la fecha de nacimiento del trabajador, la fecha de la Primera Manifestación Invalidante, el grado y porcentaje de incapacidad informados, las áreas técnicas competentes calcularán la liquidación mínima correspondiente de acuerdo a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus complementarias, debiendo constar dicha liquidación en las correspondientes actuaciones que tramitarán ante el Servicio de Homologación de la Comisión Médica”.

De este modo -en los hechos- tal reglamentación implicó un retroceso violatorio del principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos sociales previstos en los artículos 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues tiende a volver a la redacción original del artículo 12 de la LRT y excluir del computo del cálculo del IBM, los montos percibidos por el trabajador en concepto de remuneraciones cuando no cotizan aportes previsionales y de la seguridad social, al retraer la base indemnizatoria de las incapacidades laborales.

3.6 Además, tal regulación constituye un exceso reglamentario del artículo 12, inciso 1) de la LRT y desvirtúa el fin tenido en mira por el legislador al sancionarla. En efecto, la Ley 27.348 tuvo por finalidad incluir la totalidad de los sueldos o remuneraciones devengados por el trabajador, independientemente de que se le realizara -o no- los descuentos en concepto de aportes previsionales o de la seguridad social. Frente a ello, la mencionada reglamentación (dictada por un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo) que excluye del cálculo del IBM a todos rubros no remunerativos no declarados en el Sistema Único de la Seguridad Social (en adelante, SUSS) y todo otro concepto que no integre el salario aun cuando se liquide conjuntamente con él, contradice la finalidad tenida en mira al sancionar la Ley, pues de lo que se trató fue de incluir a la totalidad de las remuneraciones percibidas por el trabajador, sin distinciones al ampliar el margen de protección. Sin embargo, la Resolución de SRT N° 298/17, vienen a contradecir abiertamente dicha reforma y a dejarla sin efecto.

Los artículos 35 a 38 de la LRT, definen la naturaleza jurídica de la SRT (al asignarle el carácter de entidad autárquica dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación) y determina sus funciones (controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los Decretos reglamentarios; supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART; imponer las sanciones previstas en esta ley; requerir la información necesaria para cumplimiento de sus competencias, dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos; mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales; supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo en ellas, etc.,).

Sin embargo, pese a las atribuciones y competencias conferidas por la ley a la SRT para el cumplimiento de sus elevadas funciones, cabe señalar que, bajo ningún punto de vista, la SRT puede emitir Resoluciones de carácter legislativo derogatorias de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación o imponer excepciones reglamentarias que desvirtúan el fin tenido en mira por la norma.

El artículo 99, inciso 2 de la CN, establece que el presidente de la Nación: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”. A la par, el inciso 3) impide al poder ejecutivo “emitir disposiciones de carácter legislativo”.

En la especie, el artículo 43 de la Resolución n° 298/17 de la SRT excede la materia reglamentaria sobre el funcionamiento y trámite en Comisiones Médicas y avanza de manera arbitraria e inconstitucional sobre lo sustancial del artículo 12 de la LRT, al modificar el mecanismo de cálculo del IBM y establecerlo en base al salario previsional.

De este modo, dicha reglamentación (emanada de un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo) desoye el concepto de salario previsto en el artículo 1 del Convenio n° 95 de OIT, norma a la cual remite el artículo 12 de la LRT a la hora de establecer la base de cálculo del IBM, implica un exceso reglamentario, violenta doctrina legal de la CSJN en cuanto declaran la inconstitucionalidad de la naturaleza no remunerativa de los adicionales percibidos por los trabajadores (“Pérez Aníbal Raúl c/Disco S.A. s/ despido”, del 01/09/09, “González Martín Nicolás c/Polimat S.A. y otro”, del 19/05/10 y “Díaz Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.” del 04/06/13) e implica la violación del principio de progresividad y no regresividad, pues significa un retroceso en el reconocimiento de mejoras en materia de derechos laborales.

Así, la incorporación a la base de cálculo del IBM de los conceptos remunerativos y no remunerativos, en una fórmula que comprenda todo el salario del trabajador -prescindiendo de denominaciones que aluden a categorías conceptuales erróneas- resulta ser también lo más adecuado si se tiene en cuenta que en caso de producirse una contingencia que derive en ILT, la prestación dineraria mensual se calculará y ajustará de conformidad con lo establecido por el artículo 208 LCT (art. 6 del Dec. N° 1694/09) y, en caso de derivar en ILP, la cuantía de las prestaciones dinerarias se calculará partiendo del salario en sentido amplio (art. 12 LRT y art. 1 del Convenio OIT N° 95).

3.7 Finalmente, la presente interpretación de ninguna manera altera la ecuación económica del contrato de seguro de accidentes y enfermedades profesionales, ya que las cotizaciones que deban abonar los empleadores afiliados consideran no sólo las remuneraciones sino también "los conceptos no remunerativos, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 26.773".

3.8 En mérito a lo antes expuesto, compartiendo el dictamen fiscal del 25/09/23, se declara la inconstitucionalidad e inconveniencia de los artículos 11, 24 y 43 de la Resolución de SRT n° 298/17, reglamentario el artículo 12 de la LRT, en cuanto desconoce la naturaleza salarial de los adicionales percibidos por el actor Pablo Andrés Nieva Orellana previstos en las leyes provinciales 7991 y 7007. En consecuencia, tal norma no será aplicable al presente caso. Así lo declaro.

4. Inconstitucionalidad del DNU N° 669/19 y del artículo 2 de la SRT N° 414/19:

Del análisis del planteo formulado se desprende que el actor se limitó a impugnar la validez constitucional del DNU N° 669/19 y del artículo 2 de la Resolución N° 414/99, pero no invocó (ni mucho menos acreditó) la forma en que la normativa -cuya inconstitucionalidad pretende- violenta sus derechos toda vez que no efectuó un cálculo que permita determinar la diferencia en el monto a percibir si se liquida conforme la normativa atacada o conforme a las pautas que fundamenta su presentación.

En efecto, el actor no realizó una comparación entre el monto del IMB calculado mediante la tasa activa desde la fecha del accidente hasta la época en que debía realizarse el pago luego de 15 días de producida el alta médica del 26/01/23 (conforme a la redacción original del artículo 12 de la Ley 24557, según la reforma introducida por el artículo 11 de la Ley 27.348) y el monto que resultaría de aplicarle los coeficientes en base al RIPE por igual periodo (conforme a los mecanismos de actualización reformados por el DNU N° 669/19).

De igual manera, no invocó (ni demostró) que el mecanismo de actualización del IMB y de las indemnizaciones por incapacidad

laboral fueran perjudiciales al trabajador en comparación con la aplicación de una tasa de intereses compensatorio y moratorio.

En primer lugar, cabe señalar que el inciso 1) del artículo 12 de la Ley 24.557 (reformado por la Ley 27.348), prevé la actualización de los haberes del trabajador siniestrado para el cálculo del IMB mediante la aplicación del coeficiente por RIPTTE durante el año anterior al accidente de trabajo o de la primera manifestación invalidante, de modo tal que la base remuneratoria resultaría actualizada mediante tal mecanismo.

En segundo lugar, el inciso 2) del artículo 12 de la LRT, dispone una segunda etapa de actualización del IBM, pues al promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador durante el año anterior al siniestro, le aplica el coeficiente RIPTTE (según el DNU N° 669/19), desde la fecha del accidente de trabajo o primera manifestación invalidante hasta la época en que debía ponerse a disposición del trabajador la indemnización por incapacidad laboral (dentro de los 15 días a contar desde la notificación del dictamen de Comisión Médica, ocurrido el 23/06/23, según lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 26.773).

Por consiguiente, aplicarle intereses “compensatorios” a las indemnizaciones por incapacidad laboral como lo pretende el actor, provocaría un enriquecimiento sin causa para el trabajador, puesto que altera de manera irrazonable la formula prevista por la LRT y actualiza la base de cálculo mediante dos mecanismos superpuestos y diferentes (tasa activa por intereses compensatorios y RIPTTE).

Finalmente, el inciso 3) del artículo 12 de la LRT, establece la capitalización de los intereses (ya “moratorios”), desde la mora en el pago de las indemnizaciones previstas en el régimen de manera semestral.

De este modo, la propia LRT determina mecanismos de cálculo de las actualizaciones tanto de las remuneraciones tomadas en consideración para establecer el promedio salarial, como del IMB a los efectos del cálculo de las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Frente a tal previsión normativa el actor nada dijo y se limitó a solicitar que se apliquen intereses “compensatorios” y “moratorios” desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago, cuando la propia norma dispone de mecanismos propios de actualización y calculo, los que no fueron cuestionados por el accionante ni mucho menos demostrada la irrazonabilidad del sistema.

En consecuencia, no encontrándose invocado ni acreditado el agravio a un derecho o garantía constitucional que ocasiona la aplicación del DNU N° 669/19 y del artículo 2 de la Resolución de SRL N° 414/19, al ser la declaración de inconstitucionalidad de una norma la *ultima ratio* del sistema jurídico, concluyo que corresponde rechazar los planteos de inconstitucionalidad deducidos en contra del DNU N° 669/19 y del art. 2 de la Resolución N° 414/99. Así

lo declaro.

CUARTA CUESTIÓN

1. El actor reclama el pago de la suma de \$ 4.174.625,12 en concepto de indemnización del art. 14, inciso 2, apartado a) de la Ley 24.557, 26.773 y 27.348.

2. De las constancias de la causa, resulta que el Sr. Nieva padece, como consecuencia del accidente laboral in itinere que denuncia, una incapacidad permanente parcial y definitiva (en adelante, IPPD) del 23,60%, que pese a la intimación cursada por TCL del 16/06/2023 (cuya autenticidad fue reconocida con la contestación de oficio del Correo Oficial de la República Argentina de fecha 23/02/2024) la demandada omitió abonarle el importe que le correspondía percibir; concluyo que deben prosperar los rubros reclamados en concepto de IPPD del artículo 14, apartado 2, inciso a) de la Ley 24.557.

3. Por último, resulta preciso señalar que al haberse producido el accidente en fecha 11/02/2022 resulta aplicable las fórmulas de cálculo del IBM y de las indemnizaciones por ILPPD contempladas en la Ley 24.557, la Ley 26.773 y los pisos mínimos legales vigentes a esa época, con las reformas introducidas por la Ley 27.438 y las que prosiguieron. Así lo declaro.

Asimismo, estimo oportuno precisar que con relación a la metodología para cuantificar el monto a abonar en concepto de ILPPD, que el artículo 12 de la LRT dispone que para el cálculo del ingreso base mensual (en adelante, IBM), considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT), salarios que se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (en adelante, RIPTTE).

Además, la norma agregó una segunda etapa de actualización del IBM equivalente a la tasa de variación de la RIPTTE, desde la fecha del accidente (o de la primera manifestación invalidante), hasta la fecha en que debe realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, de conformidad a lo previsto por la Resolución n° 332/23 del 18/07/23, pues en su artículo dispone que se aplicará a "a todos los casos pendientes de liquidación, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante".

Finalmente, el inciso 3) del artículo 12 de la LRT, dispone que, en caso de falta de pago en tiempo y forma de las indemnizaciones por ILPPD, deberá aplicarse un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la

efectiva cancelación, con la acumulación (capitalización) de los intereses de manera semestral a partir del vencimiento del plazo para abonar las indemnizaciones mencionadas.

A tal efecto, considero que la fecha en que debió ponerse a disposición del trabajador la indemnización fue el día 23/06/2023, es decir quince días hábiles posteriores al dictamen de la CM del 30/05/2023 (depositado en ventanilla electrónica en igual fecha) en cuya virtud se determinó el porcentaje de incapacidad parcial permanente de la actora (cfr. 4 de la Ley n°26773). Así lo declaro.

QUINTA CUESTIÓN

1.Las partes controvierten al respecto de la tasa de interés que debe aplicarse al caso en cuestión.

Por un lado, el actor solicitó la aplicación de la tasa activa. Por su parte, la demandada planteo la inconstitucionalidad de la tasa activa alegando que las tasas de interés altas contribuyen al aumento de la litigiosidad más que las bajas porque la mejor inversión resulta de los juicios y que la ley 25.561 que estableció la prohibición de indexar la economía.

2. En primer lugar, procedo a expedirme al respecto del planteo de inconstitucionalidad deducido por la demandada en contra de la aplicación de la tasa activa.

Advirtiendo el Sentenciante que en la especie no se configuran los presupuestos para la descalificación de la tasa atacada de inconstitucional, toda vez que no precisó ni mencionó de manera clara, cual era la garantía constitucional lesionada por la tasa activa aplicable en concepto de intereses. Por ello, estimo que el planteo de inconstitucionalidad no puede prosperar.

La tacha de inconstitucionalidad efectuada por la parte demandada es genérica, porque omite precisar en qué medida su aplicación quebranta sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional. La falta de precisión del planteo impide determinar cuáles serían las disposiciones de la ley impugnada que son contrarias a la Constitución. A lo expuesto, cabe señalar que la declaración de inconstitucionalidad sólo procede cuando hay oposición clara y evidente entre las normas impugnadas y la Constitución Nacional, condiciones que el planteo omitió indicar.

En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad deducido por el letrado apoderado de la parte demandada en contra de la tasa activa.

3. En segundo lugar, procedo a expedirme al respecto de la tasa de interés aplicable al caso en cuestión.

Con respecto a la tasa de intereses, será la activa del Banco de la Nación Argentina, según doctrina legal de nuestra CSJT en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones” donde se ratifica la decisión del Alto Tribunal de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, n° 324 del 15/04/2015, entre otras) y en consideración que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes, se aplicará la tasa activa. "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago". (Dres. GANDUR -dis. parcial- GOANE -dis. parcial- SBDAR -POSSE- PEDERNEIRA). Así lo declaro. -

En consecuencia, estimo que los intereses a aplicar serán calculados en base a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a 30 días. Así lo declaro.

Finalmente, al haber incurrido en mora la accionada por no haber pagado dentro de los 15 días de quedar firme el dictamen emitido por la Comisión Médica (confr. art. 4 de la Ley 26.773), los intereses mencionados se capitalizarán de manera semestral, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso 3) la LRT y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así lo declaro.

PLANILLA DE RUBROS:

Primera Manif. Invalidante: 11/02/2022

Fecha de Mora: 24/06/2023

Edad al momento de PMI: 31

% incapacidad: 23,60%

A) Cálculo del IBM con actualización por RIPTE hasta PMI

<u>Período</u>	<u>Remuneración</u>	<u>Ripte destino</u>	<u>Ripte origen</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Total al 11/02/2022</u>
feb-21	\$ 44.417,39	12.849,20	8.263,33	1,5550	\$ 69.067,55
mar-21	\$ 51.183,29	12.849,20	8.665,19	1,4829	\$ 75.897,28
abr-21	\$ 51.183,29	12.849,20	9.201,59	1,3964	\$ 71.472,90
may-21	\$ 51.183,29	12.849,20	9.311,61	1,3799	\$ 70.628,42
jun-21	\$ 78.171,39	12.849,20	9.660,13	1,3301	\$ 103.977,88
jul-21	\$ 75.326,62	12.849,20	10.089,96	1,2735	\$ 95.925,73
ago-21	\$ 65.863,15	12.849,20	10.326,11	1,2443	\$ 81.956,20
sep-21	\$ 57.859,48	12.849,20	10.762,48	1,1939	\$ 69.077,76
oct-21	\$ 72.859,48	12.849,20	11.148,95	1,1525	\$ 83.970,78

nov-21	\$ 62.719,48	12.849,20	11.497,72	1,1175	\$ 70.091,73
dic-21	\$ 106.279,47	12.849,20	11.726,30	1,0958	\$ 116.456,70
ene-22	\$ 67.859,48	12.849,20	12.271,35	1,0471	\$ 71.054,94
Importe de remuneraciones sujetas a aportes últimos 12 meses					\$ 979.577,88
Días corridos en servicio en los últimos 12 meses					365
Valor Ingreso Base Diario :		(\$ 979577,88 / 365)			\$ 2.683,78
Valor Ingreso Base Mensual:		(\$ 2683,78 x 30,4)			\$ 81.586,76

B) Cálculo de interés con variación de Ripte desde 11/02/22 al 24/06/23 s/ Res. 332/2023 SSN

Período	% Variación RIPTE	Cant. Días	Tasa int / dias mes x días	% Interes	\$ Intereses
feb-22	4,70%	17	4,70% / 28 / 17	2,85%	\$ 2.328,14
mar-22	7,80%	31	7,80% / 31 / 31	7,80%	\$ 6.363,77
abr-22	5,90%	30	5,90% / 30 / 30	5,90%	\$ 4.813,62
may-22	4,00%	31	4,00% / 31 / 31	4,00%	\$ 3.263,47
jun-22	5,80%	30	5,80% / 30 / 30	5,80%	\$ 4.732,03
jul-22	5,30%	31	5,30% / 31 / 31	5,30%	\$ 4.324,10
ago-22	4,60%	31	4,60% / 31 / 31	4,60%	\$ 3.752,99
sep-22	6,30%	30	6,30% / 30 / 30	6,30%	\$ 5.139,97
oct-22	5,50%	31	5,50% / 31 / 31	5,50%	\$ 4.487,27
nov-22	5,60%	30	5,60% / 30 / 30	5,60%	\$ 4.568,86
dic-22	5,40%	31	5,40% / 31 / 31	5,40%	\$ 4.405,69
ene-23	3,80%	31	3,80% / 31 / 31	3,80%	\$ 3.100,30
feb-23	8,40%	28	8,40% / 28 / 28	8,40%	\$ 6.853,29
mar-23	9,80%	31	9,80% / 31 / 31	9,80%	\$ 7.995,50
abr-23	9,80%	30	9,80% / 30 / 30	9,80%	\$ 7.995,50
may-23	6,20%	31	6,20% / 31 / 31	6,20%	\$ 5.058,38
jun-23	7,40%	24	7,40% / 30 / 24	5,92%	\$ 4.829,94
				102,97%	\$ 84.012,80
Ingreso Base Mensual al 11/02/2022					\$ 81.586,76
Interés con variación de Ripte desde 11/02/22 al 24/06/23					\$ 84.012,80
Ingreso Base Mensual al 24/06/2023					\$ 165.599,56

C) Cálculo indemnizaciones LRT

1) Art. 14, inc. 2°, ap. a) LRT

\$165599,56 x 53 x 65 / 31 x 0,236 \$ 4.343.088,87

(*) Aplicación Dcto. 1694/09

Piso Mínimo (Res. S.R.T. 49/2021)

\$ 5.044.408,00 x 0,236 \$ 1.190.480,29

Int c/ var de Ripte diario del 11/02/22 al 24/06/23 \$ 1.225.880,07

Piso Mínimo actualizado al 24/06/2023 \$ 2.416.360,36

Total \$ al 24/06/2023 (se toma resultado de fórmula por ser el mayor) \$ 4.343.088,87

D) Capitalización semestral según art. 12 inc. 3 Ley 24.557

<u>Capital</u>	<u>Desde</u>	<u>Hasta</u>	<u>% de interes</u>	<u>\$ Interes acumulado</u>	<u>Subtotal</u>
\$ 4.343.088,87	24/06/2023	24/12/2023	65,86%	\$ 2.860.163,87	\$ 7.203.252,75
\$ 7.203.252,75	25/12/2023	31/03/2024	33,59%	\$ 2.419.284,47	\$ 9.622.537,21
Total \$ al 31/03/2024					<u>\$ 9.622.537,21</u>

COSTAS:

Atento a que la accionada resulta ser la responsable del acto lesivo y que la omisión en el pago de las indemnizaciones por accidente de trabajo dio lugar a la presente acción de amparo, de conformidad con el principio objetivo de la derrota que emana de la doctrina del artículo 61 del CPCYCC (de aplicación supletoria), las costas procesales se imponen en su totalidad a la accionada vencida (artículo 26 del CPC). Así lo declaro.

HONORARIOS: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. “2” de la Ley 6.204.

Atento al resultado arribado en la *litis* y su la naturaleza, es de aplicación el artículo 50 inc. 1) de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto de condena, el que, según planilla precedente, resulta al 31/03/2024 la suma de \$9.622.537,21 (pesos nueve millones seiscientos veintidos mil quinientos treinta y siete con veintiún centavos).

En lo que respecta al pedido de inaplicabilidad de la ley n° 24.432 y el planteo de inconstitucionalidad deducido en subsidio en contra de la misma, estimo que no puede prosperar por cuanto el tope del 25% no afecta la determinación de los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso, sino que sólo limita la responsabilidad por costas judiciales, entre las que se incluyen dichos honorarios, con lo cual se afectará -en su caso- la percepción o el cobro de los mismos para sus beneficiarios, pero no la regulación, desde que la norma alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas, cuestión distinta de la relativa al monto de los honorarios profesionales, dado que respecto a su determinación o cuantificación, la norma no realiza ninguna prevención y la regulación debe ser efectuada por el juez ateniéndose a lo que al respecto dispongan las normas arancelarias locales.

En consecuencia, teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 14, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5480 y 51 del C.P.T. con los topes y demás pautas impuestas por la ley 24.432 ratificada por la ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1.- Al letrado Gómez David Emanuel, por su actuación en el doble carácter por el actor, en las dos etapas del proceso de conocimiento, el 14% más el 55% de la base regulatoria, equivalente a la suma de pesos \$2.237.239,90 (pesos dos millones doscientos treinta y siete mil doscientos treinta y nueve con noventa centavos).

2.- A los letrados apoderados de la Caja Popular de Ahorros:

a. Al letrado, Rafael Eduardo Rillo Cabanne, por su actuación en el doble carácter por la demandada, en una etapa y media del proceso, el 8% más el 55% de la base regulatoria y sacando el proporcional a las etapas del proceso en las que intervino, equivalente a la suma de pesos \$894.895,96 (pesos ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con noventa y seis centavos).

b. A la letrada, María Eugenia Cirilo, por su actuación en media etapa del proceso, el 8% más el 55% de la base regulatoria y sacando el proporcional a las etapas del proceso en las que intervino, equivalente a la suma de pesos \$298.298,65.

Sin embargo, al no alcanzar el mínimo establecido por el art. 38 in fine de la ley 5.480, corresponde regularle el valor de una consulta escrita fijada por el Colegio de Abogados (fijada actualmente en \$350.000), más el 55% del art. 14 de la citada ley arancelaria, por su actuación en el doble carácter, lo que equivale a la suma de \$542.500 (pesos quinientos cuarenta y dos mil quinientos).

3.- Por las incidencias resueltas en la presente causa:

a. por la actuación que dio origen a sentencia de fecha 30/08/2023, en la que se impusieron las costas por el orden causado: al Dr. Gómez, en la suma de \$246.096,39 (base reg. x 11% -art 38- x 1,55 -art 14- x 15% -art 59-), y al Dr. Rillo Cabanne, en la suma de \$246.096,39 (base reg. x 11% -art 38- x 1,55 -art 14- x 15% -art 59-).

b. por la actuación que dio origen a sentencia de fecha 20/10/2023, en la que se impusieron las costas a la demandada vencida: al Dr. Gómez, en la suma de \$447.447,98 (base reg. x 15% -art 38- x 1,55 -art 14- x 20% -art 59-), y al Dr. Rillo Cabanne, en la suma de \$119.319,46 (base reg. x 8% -art 38- x 1,55 -art 14- x 10% -art 59-).

c. por la actuación que dio origen a sentencia de fecha 28/12/2023, en la que se impusieron las costas a la demandada vencida: al Dr. Gómez, en la suma de \$447.447,98 (base reg. x 15% -art 38- x 1,55 -art 14- x 20% -art 59-), y al Dr. Rillo Cabanne, en la suma de \$119.319,46 (base reg. x 8% -art 38- x 1,55 -art 14- x 10% -art 59-).

d. por la actuación que dio origen a sentencia de fecha 23/02/2024, en la que se impusieron las costas a la demandada vencida: al Dr.

Gómez, en la suma de \$447.447,98 (base reg. x 15% -art 38- x 1,55 -art 14- x 20% -art 59-), y al Dr. Rillo Cabanne, en la suma de \$119.319,46 (base reg. x 8% -art 38- x 1,55 -art 14- x 10% -art 59-).

Las sumas dinerarias reguladas en concepto de honorarios profesionales deberán ser abonadas por quienes resulten responsable de su pago, en el plazo de 10 (DIEZ) días de quedar firme la presente, de conformidad a lo estipulado por los arts. 601, subsiguientes y cctes del CPCyC y 23 de la Ley 5.480.

En caso de incumplimiento de la obligación antes mencionada, las sumas reguladas devengarán intereses calculados mediante la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, desde el vencimiento del plazo y hasta su efectivo pago. Así lo declaro.

En consecuencia,

RESUELVO

I) DECLARAR ADMISIBLE la vía del amparo elegida por el actor para entender la presente acción.

II) HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO

deducida por el Sr. Pablo Andrés Nieva Orellana DNI N° 34.764.232 con domicilio real en Santa Fe n° 2532 en contra de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (Popul ART) CUIT: 30-51799955-1, con domicilio en calle San Martín n° 469, condenando a esta última al pago de la suma de \$9.622.537,21 (pesos nueve millones seiscientos veintidos mil quinientos treinta y siete con veintiún centavos) por el rubro indemnización por ILPPD del artículo 14, inciso 2), apartado a) de la LRT, actualizados mediante el mecanismo previsto en el artículo 12, inciso 3) de la LRT; suma que deberá ser depositada en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ley, por lo antes considera.

III) HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad deducido por el actor en contra del artículo 43 de la Resolución N° 289/17 de la SRT, por lo cual dicha norma no será aplicada en el presente caso, en mérito a lo tratado.

IV) RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad del DNU N° 669/19 y del artículo 2 de la Resolución N° 414/99, por lo antes meritado.

V) RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad de la tasa activa deducido por el letrado apoderado de la parte demandada.

VI) IMPONER LAS COSTAS: en su totalidad a la demandada vencida, por lo considerado.

VII) NOTIFICAR a la Sra. Agente Fiscal de la Ilda. Nominación, en su público despacho, de la presente resolución.

VIII) REGULAR LOS HONORARIOS, conforme a lo considerado, de la siguiente manera:

1.- Al letrado Gómez David Emanuel (MP N° 9.060), la suma de pesos \$2.237.239,90 (pesos dos millones doscientos treinta y siete mil doscientos treinta y nueve con noventa centavos), de \$246.096,39 (pesos doscientos cuarenta y seis mil noventa y seis con treinta y nueve centavos), de \$447.447,98 (pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete con noventa y ocho centavos), de \$447.447,98 (pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete con noventa y ocho centavos) y de \$447.447,98 (pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete con noventa y ocho centavos).

2.- Al letrado Rafael Eduardo Rillo Cabanne (MP N° 2.932), la suma de pesos \$894.895,96 (pesos ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con noventa y seis centavos), de \$246.096,39 (pesos doscientos cuarenta y seis mil noventa y seis con treinta y nueve centavos), de \$119.319,46 (pesos ciento diecinueve mil trescientos diecinueve con cuarenta y seis centavos), de \$119.319,46 (pesos ciento diecinueve mil trescientos diecinueve con cuarenta y seis centavos) y de \$119.319,46 (pesos ciento diecinueve mil trescientos diecinueve con cuarenta y seis centavos).

3.- A la letrada, María Eugenia Cirilo (MP N° 3.310), la suma de \$542.500 (pesos quinientos cuarenta y dos mil quinientos).

4.- Las sumas dinerarias reguladas en concepto de honorarios profesionales deberán ser abonadas por quienes resulten responsable de su pago, en el plazo de 10 (DIEZ) días de quedar firme la presente, de conformidad a lo estipulado por los arts. 601, ssgtes. y cctes y artículo 23 de la Ley 5480.

IX) PRACTICAR Y REPONER PLANILLA FISCAL en su oportunidad (artículo 13 de la Ley n° 6204).

X) COMUNICAR a la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de Tucumán.

PROTOCOLIZAR, HACER SABER Y HACER CUMPLIR.

1407/23 MSC

NRO.SENT: 545 - FECHA SENT: 19/04/2024

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=AQUINO Ruben Dario, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20285346372, Fecha:19/04/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>